

REPÚBLICA DE COLOMBIA



**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL**

Medellín, cuatro (04) de octubre de dos mil trece (2013)

Radicado:	05001 33 33 004 2013 00234 00
Medio de control:	Nulidad y restablecimiento del derecho – laboral
Demandante:	Shirley Yohana Hernández Carvajal
Demandado:	Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Asunto:	Repone auto que declaró falta de jurisdicción – Admite demanda

A Fls. 40 – 49, la apoderada de la parte demandante interpuso, dentro del término, recurso de reposición contra el auto mediante el cual, en fecha 02 de agosto de 2013 (Fls. 34 – 36), se declaró la falta de jurisdicción para conocer del asunto y se ordenó la remisión del expediente con destino a los Juzgados Laborales del Circuito de Medellín.

Argumenta su inconformidad, frente a la decisión en comento, indicando que la competencia para conocer del asunto radica en la jurisdicción de lo contencioso administrativo; refiere, como sustento de su oposición, que si bien, como lo consideró el Despacho, el acto administrativo que reconoce las cesantías al determinar plenamente el valor a reconocer por dicho concepto y la fecha a partir de la cual se hace exigible la obligación, podría pretenderse por la vía ejecutiva, en el caso de autos el acto mediante el cual se reconocieron las cesantías no las determina expresamente, razón por la cual, arguye, se requiere de la determinación exacta del valor de las mismas, por vía de un proceso ordinario, a fin que se declare probada la existencia de la sanción por mora.

Refiere igualmente que en el particular existe un acto administrativo ficto respecto del cual se ejerce el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que debe ser objeto de pronunciamiento en esta sede judicial, como si se tratase de un acto expreso que negare el derecho de su poderdante.

Indica que en el evento de acudir a la vía ejecutiva, los documentos adosados con la demanda, según pronunciamientos a nivel jurisprudencial¹, no permiten configurar el título complejo idóneo capaz de representar una obligación en toda su extensión, y produce confusión, en orden a lo cual no puede librarse orden de pago ante la inexistencia del título. Apoya su decisión indicando que el Consejo Superior de la

¹ Cita lo expuesto por la sala laboral del Tribunal Superior de Armenia M.P. Dr. Édgar Rendón Londoño, sin radicado de fecha 15 de febrero de 2012.

Judicatura, con ponencia del Dr. José Ovidio Claros Polanco², determinó que en eventos como el presente lo discutido se circunscribe al acto mediante el cual se niega el reconocimiento de la sanción moratoria, mismo que puede ser cuestionado, ante la inconformidad del administrado destinatario del acto, por vía de nulidad y restablecimiento del derecho habida cuenta que se trata de una entidad pública en calidad de demandada, por lo que su conocimiento radicaría en esta jurisdicción.

Citó igualmente decisión proferida por el mismo Corporado, dentro del radicado 11001010200020120227400³, que en su sentir, reitera lo indicado en la sentencia reseñada en precedencia, así como sentencia del Consejo de Estado⁴.

Finalmente depreca se reponga la providencia en atención a que lo demandado es el acto ficto que negó el reconocimiento de la sanción moratoria habida cuenta que la demandada no accedió a su reconocimiento en vía gubernativa.

Corrido el traslado, de que trata el Art. 242 del CPACA (Fl. 66), no se obtuvo pronunciamiento alguno de parte de la entidad demandada.

CONSIDERACIONES

De conformidad con lo preceptuado por el Art. 242 del CPACA: *“Salvo norma legal en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. En cuanto a su oportunidad y trámite se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil”*. Así, con ocasión de la decisión sobre el recurso de reposición el Juez, como director del proceso puede, o bien revocar la decisión recurrida, o por el contrario confirmarla, sin que estas decisiones sean susceptibles nuevamente del mismo recurso; verificado en el Art. 243 ibídem⁵, que la decisión mediante la cual se declara la falta de competencia para conocer de un asunto no es susceptible del recurso de apelación, tal situación deviene en procedente resolver el recurso de reposición tal y como fue interpuesto por la apoderada de la parte demandante.

Así las cosas, no obstante haber señalado el Despacho, en fecha 02 de agosto de 2013 (Fls. 34 – 36), con ocasión del estudio de admisibilidad del

² En sentencia que refiere calendada el 30 de mayo de 2012.

³ M.P. Dr. Angelino Lizcano Rivera.

⁴ Expediente radicado 1998-760 C.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

⁵ *“Son apelables las sentencias de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: 1. El que rechaza la demanda. 2. El que decreta una medida cautelar y el que resuelva los incidentes de responsabilidad*

y desacato en ese mismo trámite. 3. El que ponga fin al proceso. 4. El que apruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales, recurso que solo podrá ser interpuesto por el Ministerio Público. 5. El que resuelva la liquidación de la condena o de los perjuicios. 6. El que decreta las nulidades procesales. 7. El que niega la intervención de terceros.

El que niega la intervención de terceros. 8. El que prescinda de la audiencia de pruebas. 9. El que deniegue el decreto o práctica de alguna prueba pedida oportunamente. Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia. El recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo, salvo en los casos a que se refieren los numerales 2, 6, 7 y 9 de este artículo, que se concederán en el efecto devolutivo. Parágrafo. La apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente Código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil.”

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho – laboral, que con la simple acreditación del retardo en el pago de las cesantías aunado al salario diario devengado podía acudir ante la jurisdicción ordinaria laboral, en ejercicio de la acción ejecutiva, tal posición debe ser recogida en esta oportunidad por el fallador por las razones que a continuación pasan a verse:

En primer lugar, no obstante haberse sustentado la decisión hoy recurrida en pronunciamientos proferidos tanto por el Tribunal Administrativo de Antioquia como por el Consejo de Estado e incluso el Consejo Superior de la Judicatura, no desconoce el Juzgado que a la fecha, **mediante sentencia de unificación** proferida por este último Corporado⁶ se definió que, pretendiéndose, como para el caso de autos, obtener la declaratoria de nulidad del acto ficto, mediante el cual se negó la solicitud del reconocimiento y pago de la sanción moratoria, procede el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho a fin de controvertir la viabilidad del pago de ésta, y que cuando lo pretendido sea obtener orden de pago, constituido el título complejo, será procedente acudir ante la jurisdicción ordinaria.

En segundo término, tal posición ha sido recogida por el Tribunal Administrativo de Antioquia con ponencias de los Magistrados Gonzalo Zambrano Velandia⁷ y Jorge Iván Duque Gutiérrez⁸ al considerar que, en efecto, cuando lo pretendido sea obtener la declaración de nulidad del acto ficto que niega el reconocimiento del pago de las cesantías la vía procesal a incoar no es otra diferente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contemplado en el Art. 138 del CPACA.

Así las cosas, estima el Despacho, analizados los pronunciamientos que a nivel jurisprudencial han sido emitidos por las Corporaciones en precedencia referidas, y compartidos los argumentos por ellas esgrimidos al resolver en uno y otro caso asuntos como el que hoy convoca la atención del Juzgado, que se reviste competencia para conocer del medio de control incoado, en orden a lo cual procede **REPONER** el auto mediante el cual se declarara la falta de jurisdicción para conocer del asunto, situación que conlleva a efectuar el estudio de admisibilidad de la demanda.

Por reunir los requisitos legales establecidos en los Arts. 161 y ss. de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, **SE ADMITE** la demanda que en ejercicio del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – LABORAL, consagrado en el Art. 138 ibídem, promueve a través de apoderado judicial el Sr. **SHIRLEY YOHANA HERNÁNDEZ CARVAJAL** en contra de la **NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN**

⁶ Sala jurisdiccional disciplinaria, providencia del 26 de junio de 2013, radicado 11001010200020130107000.

⁷ Véase auto del 23 de septiembre de 2013 proferido con ocasión de la apelación de la decisión mediante la cual el Juzgado de origen declaró en la audiencia inicial la falta de jurisdicción y ordenó la remisión del expediente a la jurisdicción ordinaria dentro del proceso radicado 0500133302620130031101.

⁸ Véase auto del 21 de agosto de 2013 proferido con ocasión de la apelación de la decisión mediante la cual el Juzgado de origen declaró la nulidad de lo actuado y ordenó la remisión del expediente a la jurisdicción ordinaria dentro del proceso radicado 0500133301020130027101.

NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.

Notifíquese por estados al **demandante** el presente auto admisorio, de conformidad con lo previsto en los Arts. 171 Num. 1° y 201 del CPACA.

De conformidad con lo establecido en los Arts. 171 núms. 1° y 2°, 198 y 199 del CPACA, este último modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso – C. G. del P., notifíquese personalmente: al **representante legal de la entidad demandada NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO** o a quien ésta haya delegado la facultad de recibir notificaciones, al **Ministerio Público** en este caso, al señor Procurador 108 Judicial Delegado ante este Despacho Dr. Francisco Javier García Restrepo, y a la **Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**.

Acorde con lo establecido en el Art. 172 del CPACA, se correrá traslado de la demanda a la parte demandada y al Ministerio Público por el término de **treinta (30) días**. Este plazo comenzará a correr al vencimiento del término común de **veinticinco (25) días**, después de surtida la última notificación personal (Art. 199 del CPACA, modificado por el Art. 612 del C GP.).

A la fecha se tiene que los gastos que demande el proceso previstos en el num. 4° del Art. 171 del CPACA, son los relacionados con la remisión a la parte demandada de la copia de la demanda, anexos y auto admisorio a través del servicio postal autorizado, como lo ordena el inciso 5° del artículo 199 del C.P.A.C.A, modificado por el 612 del CGP. Para cuyos efectos habrá de consignar la suma de **trece mil pesos (\$13.000.00)** por cada entidad demandada, **trece mil pesos (\$13.000.00)** por el Ministerio Público, y **trece mil pesos (\$13.000.00)** por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la cuenta de depósitos judiciales correspondiente a este Despacho en el Banco Agrario No. 41331000198-0 convenio 11492. Se concede un término de **treinta (30) días** contados a partir del día siguiente al de la notificación por estados de esta providencia para efectuar el pago, de no efectuarse dentro del término establecido, se procederá en la forma prevista en el Art. 178 del CPACA, relativo al desistimiento tácito, precisando que la notificación por correo electrónico no puede surtirse sin cumplirse con lo aquí ordenado, por cuanto inmediatamente se surta aquella deben remitirse por servicio postal los documentos citados en precedencia.

La parte actora deberá aportar original y copia del recibo de consignación de los gastos de notificación y tres (03) copias del presente auto admisorio.

De conformidad con lo establecido en los núms. 4° y 5° y parágrafo 1° del Art. 175 del CPACA, deberá la parte demandada con la contestación de la demanda aportar las pruebas que tenga en su poder, las que pretenda hacer valer en el proceso, los dictámenes periciales que considere necesarios y el expediente administrativo que contenga los antecedentes de

la actuación objeto del proceso y que se encuentran en su poder, so pena, respecto de este último, de incurrir en falta disciplinaria gravísima.

Finalmente, no obstante no constituir causal de inadmisión, se insta a la parte demandante a fin que se sirva otorgar poder en el que se indiquen con precisión y claridad los medios de control previstos en el CPACA para eventos como el sometido a conocimiento de esta judicatura, habida cuenta que en el mandato conferido obrante a Fls. 19 – 20 se advierte que el mismo fue conferido para el ejercicio de las acciones contempladas en el Decreto 01 de 1984 de presente que a la fecha de otorgamiento del mandato y de presentación de la demanda se deben atender las disposiciones contenidas en el CPACA acorde a lo dispuesto por el Art. 308 ejúsdem.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

(firmado el original)

EVANNY MARTÍNEZ CORREA

Juez

4

**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN**

Siendo las ocho de la mañana (8:00A.M) del día de hoy **07 DE OCTUBRE DE 2013** se notifica a las partes la providencia que antecede por anotación en Estados.

(firmado el original)

EDWIN ALEXANDER ARBOLEDA TAVERA

Secretario